



PERÚ:

**CRISIS DE UN RÉGIMEN
SIN ALTERNATIVA**

Dossier

Perú: crisis de un régimen sin alternativas

Dossier

Contenido:

Los nadie,
por Eduardo Galeano.

Perú, crisis de un régimen sin alternativas,
por Manolo Monereo

Que se vayan todos otra vez, en Perú
Por Pablo Stefanoni

Perú, arremetida autoritaria y respuesta popular,
por Anahí Durand



Maquetación:

Demófilo
2023

Ilustración de la portada:

[*El Ágora Digital*](#)

Libro Libre, sin interés comercial ni finalidad lucrativa.

Biblioteca Virtual
OMEGALFA
2023

Los nadie.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana,
ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pié derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano

PERÚ, CRISIS DE UN RÉGIMEN SIN ALTERNATIVAS |★|

por **Manolo Monereo** |★★|

No se habla mucho en España del Perú. De vez en cuando nos llegan (malas) noticias de conflictos, de muertes. Casi siempre predomina la corrupción y eso que se llama hoy la anti política. Se nota mucho este juego de los medios de comunicación que hacen invisibles a determinados países y a otros les dedican una atención superlativa.

Perú, a pesar de todo, es una democracia de las “buenas”, de las que respetan la economía de mercado, que garantizan y dan seguridad a las inversiones extranjeras, que favorecen los grandes beneficios empresariales y, lo mejor de lo mejor, poco controladas y gravadas por las instituciones estatales.

El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior destitución es presentado como una especie de mal endémico de la sociedad peruana que engarza inestabilidad y corrupción. La historia es conocida: el expresidente, como tantos otros, emerge del anonimato y de un día para otro gana en unas reñidísimas elecciones- apenas 40 mil votos- a Keiko Fujimori.

Como tantos otros, empezaron por la izquierda y terminaron en la nada. Enfrente, una oposición cerrada, articulada en el

★ Fuente: [NODAL. Noticias de América Latina y el Caribe](#)

★★ Abogado, politólogo y político español. Fue diputado en la XII legislatura por Unidos Podemos.

Congreso de la República y organizada por los medios de comunicación. Detrás, la mano cada vez más visible de los grandes grupos económicos. El problema es siempre el mismo: ¿qué poder tiene el gobierno de la República?, ¿Cuál es su margen real de maniobra?, ¿Cuál su autonomía para hacer política para los comunes y corrientes? Como siempre, para conocer el presente hay que mirar hacia atrás.

Chile y Perú siempre han estado (mal) relacionadas. Chile se adelanta siempre y señala el camino. Ambas repúblicas tuvieron una sólida y aguerrida dictadura; ambas tuvieron una vocación fundadora; fueron dictaduras constituyentes que cambiaron la sociedad y la relación entre esta y el Estado. Ambas impusieron el modelo socio-económico del “consenso de Washington” a la criolla, es decir, hasta sus últimas consecuencias, por las malas y con espíritu de clase.

Es la paradoja del ordo liberalismo: el orden del mercado debe ser impuesto por el poder político; no surge espontáneamente de la naturaleza de las cosas. Eso se lo enseñaron von Hayek y Milton Friedman a Pinochet, hay que frenar dictatorialmente a la política democrática, limitarla y adaptarla al mercado. La construcción político-institucional del neoliberalismo necesitaba de una dictadura soberana que cambiara la sociedad y sus reglas básicas. Sin poder político no hay liberalismo que valga. Así es la vida más allá de los manuales sobre el equilibrio general y demás falsedades administradas.

Las diferencias entre la realidad europea y la latinoamericana no son tantas, pero son significativas. En su centro está la contradicción entre democracia y capitalismo. En el lado americano del Atlántico se impuso el neoliberalismo por la fuerza del poder político-militar que actuaron como regímenes

fundacionales. En el lado europeo se hizo de otra forma más sofisticada y flexible: deconstruyendo los Estados nacionales y fragmentado la soberanía popular, es decir, neutralizándola.

Los Tratados de Maastricht hicieron obligatorias para todos los Estados las políticas neoliberales, impusieron políticas económicas homogéneas para realidades heterogéneas y desligaron hábilmente la política monetaria de la política fiscal. Conclusión: cuando se gobierna todos hacen las mismas políticas; todos neoliberales y nadie representa ya a las clases populares. La extrema derecha busca aquí su nicho electoral. América Latina es un laboratorio, no es el pasado, es el futuro.

Las singularidades del modelo peruano tienen que ver, en gran medida, con el fenómeno de Sendero Luminoso. Pinochet derrotó a la izquierda y, en muchos sentidos, la transformó. El régimen fujimorista se construyó en el conflicto militar contra Sendero Luminoso que, es bueno no olvidarlo, aplicó todas las técnicas de la estrategia anti insurgente de la Escuela de las Américas, en el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional diseñada por los EEUU y puesta a punto por los militares brasileños.

Se impuso una contrarrevolución que arruinó, no solo el imaginario socialista y de izquierdas en un sentido amplio, sino que restó fuerza y protagonismo a las propuestas democráticas y desarrollistas. En definitiva, se construyó desde el poder un nuevo tipo de sociedad que le dio el protagonismo fundamental a los grandes grupos económicos, a los oligopolios empresariales y financieros, con una fuerte presencia del capital extranjero.

Chile y Perú terminaron por institucionalizar la nueva correlación de fuerzas en sendas constituciones que tenían vocación

de permanencia en sus aspectos fundamentales. Dicho de otra forma, estaban diseñadas para no ser revisadas ni reformadas. Las transiciones tenían como objetivo construir un tipo de democracias que no pusiesen en peligro la correlación de fuerzas creadas por las dictaduras; la Constitución era la garantía del poder y límite al poder constituyente del pueblo.

En eso se está, con pequeñas reformas. Las constituciones siguen vigentes en su núcleo fundacional; es decir, imponiendo un modelo socioeconómico que impide políticas democráticas avanzadas, la defensa y desarrollo de los derechos sociales y ambientales fundamentales y, lo más importante, el cambio de modelo económico y su matriz de poder.

No es casualidad que en cuatro años haya habido seis presidentes en Perú. No es casualidad que Fujimori y Alejandro Toledo estén condenados y cumpliendo la pena impuesta. No es casualidad que Alan García se suicidara precisamente para evitar la cárcel y la ignominia. Ollanta Humala está procesado. Se podría continuar. ¿Inestabilidad del sistema político? Evidente.

La pregunta es ¿por qué? El régimen peruano se vertebra, es bueno repetirlo, por medio de una constitución (la de Fujimori de 1993) cuyo fundamentos económicos y sociales fueron diseñados para ser inmutables, permanentes, pétreos. Es la única parte realmente normativa, todos los demás enunciados son puramente nominales cuando no meras declaraciones sin contenido jurídico alguno.

¿Quién la garantiza? No es el tribunal constitucional, no; son los grandes grupos de poder económico, la oligarquía financiera-empresarial dominante a través de su control monopólico de los medios de comunicación, de los grupos políticos y de

las bancadas parlamentarias. Esa es la verdadera “constitución material” que gobierna a la sociedad y al Estado.

Para entender cómo funciona el sistema político peruano se podría usar la metáfora de un escenario teatral. La clase política haría de actores solo aparentes; por detrás y por delante los coros, los dioses que advierten y dirigen. El público sería el pueblo que hace de espectador interesado de una tragicomedia que tiene principio, pero nunca fin. La dirección de la obra es colectiva, me refiero a los medios de comunicación; ellos quitan y ponen, llevan el ritmo y generan los suspenses y van cambiando el guion según lo que aconsejan unos dioses siempre todopoderosos.

El ejercicio es cruel pero muy eficaz. Es la historia de una clase política corrupta, inepta y sin proyecto. Cómo saben muy bien los dioses, la corrupción es el fundamento de la gobernabilidad, el sistema funciona por y desde la corrupción. La dirección colectiva de la obra señala a los corruptos y oculta a los corruptores. La trama es casi perfecta: la oligarquía financiera empresarial corrompe a los políticos y los medios que ellos controlan los denuncian, los denigran.

Lo que se transmite al pueblo-espectador es que la política no vale para transformar a la sociedad, que la democracia realmente existente se basa en políticos que tienen intereses propios, que, por naturaleza, son corruptos y que la política es cosa de políticos. No hay salvación en lo colectivo, en lo público. La búsqueda del interés individual nos hará libres y plenos.

Quienes llegan al gobierno se ven forzado o a pactar con los que mandan y no se presentan a las elecciones, o a generar dinámicas de movilización, de conflicto y de lucha social que modifiquen la correlación de fuerzas, en este caso, activando

el poder constituyente del pueblo, fortaleciendo el sujeto popular en torno a un proyecto alternativo de país.

El dilema es trágico: traicionar o perecer, es decir, o ser cooptado por el poder o ser derribado por él. Pedro Castillo ha jugado a todo y al final ha sido destituido. Siempre careció de estrategia, de una política de alianzas definida y se convirtió en prisionero de una de las redes del poder que nunca consiguió gobernar ni siquiera (re) conocer. Lo suyo fue un intento desesperado y ciego.

La tragicomedia sigue. La crisis de sistema es, pues, permanente. La inestabilidad oculta la “estabilidad” de los que mandan, su enorme poder. Hay un viejo problema, pero ¿cuál? La gente, las clases populares engañadas una y otra vez, siempre postergadas en sus reivindicaciones básicas, sin voz y sin protección. Donde hay dominación y explotación siempre aparece, tarde o temprano, la rebeldía, la insumisión, el conflicto social en un sentido amplio.

Los que mandan y no se presenta a las elecciones ganan de nuevo, una nueva victoria en su larga marcha de acumulación de riqueza, renta y poder. Pronto se pueden encontrar con problemas serios. Al final consiguieron echar a Pedro Castillo, esta vez no la convertirán en derrota popular. En el horizonte asoma Antauro Humala. Un enemigo a las puertas. ■

“QUE SE VAYAN TODOS”, OTRA VEZ, EN PERÚ |★|

por **Pablo Stefanoni** |★★|

La decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, que desde el comienzo actuó de manera obstruccionista e intentó una y otra vez destituirlo, fue un salto al vacío que acabó con la detención del mandatario. Proveniente del Perú profundo, el presidente nunca pudo armar un gobierno y se recostó en un círculo opaco de colaboradores que acabó generando un fuerte aislamiento del jefe de Estado. La nueva presidenta se enfrenta hoy con fuertes protestas que demandan la disolución del Congreso, más impopular que Castillo, y el adelanto electoral para 2023, en un nuevo capítulo de una sucesión de crisis políticas que llevó a la mayoría de los expresidentes a la prisión.

El 7 de diciembre de 2022 al mediodía, el aún presidente Pedro Castillo apareció en televisión y anunció con un discurso

★ Fuente: [VientoSur](#)

★★ Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Combina su actividad académica con su trabajo periodístico. Sus áreas de investigación son historia y política latinoamericana. Desde 2011 es jefe de redacción de la revista [Nueva Sociedad](#). Ha dirigido la edición boliviana de *Le Monde Diplomatique* y ha escrito sobre los procesos políticos en el área andina. Su último libro es *¿La rebeldía se volvió de derechas?* (Clave Intelectual/Siglo XXI, Madrid, 2021). Integra el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas/Universidad General de San Martín.

tembloroso la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y un gobierno de excepción por medio de decretos ley junto con una próxima convocatoria a elecciones para un Congreso constituyente. Declaró, además, el toque de queda en todo el territorio nacional. Fueron 10 minutos que acabaron con 18 meses de gobierno en los que Castillo no encontró la forma de dar un rumbo a la maquinaria estatal y actuó de manera errática, casi con el único objetivo de no ser destituido por un Congreso que conspiró desde el primer día de su gobierno.

En un comienzo, el gabinete de ministros representó a las diversas sensibilidades de izquierda —incluida la urbana, que proveyó figuras como el economista Pedro Francke— pero las dificultades de los ministros para coordinar con el presidente y, de manera más amplia, la deriva del gobierno, fueron alejando a muchos de sus colaboradores. Castillo cambió más de 70 ministros y tuvo cinco presidentes del Consejo de Ministros en un año y medio. A veces, los giros ideológicos fueron abruptos, como el pasaje de Mirtha Vásquez (abogada de derechos humanos y cuestiones ambientales) a Héctor Valer, quien militó en el partido Renovación Nacional (extrema derecha) en el cargo de *premier*.

En todo ese periodo, el Congreso —de mayoría opositora pero fragmentada— intentó una y otra conseguir los votos necesarios para tumbar al presidente bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral permanente”, y este se terminó rodeando de círculos de confianza cada vez más cerrados y opacos, que incluían dirigentes de su región natal, y la corrupción en la administración pública activó diversas investigaciones fiscales que llegaron cada vez más cerca de Castillo.

Su decisión de disolver el Congreso fue un salto al vacío. Sin apoyo político ni militar, ni fuerza en las calles, el autogolpe terminó siendo contra sí mismo. Y la decisión resulta particularmente inexplicable dado que el Congreso carecía de la mayoría especial para destituirlo en la tercera votación de vacancia prevista para ese mismo día. En pocos minutos, sus ministros comenzaron a renunciar en desacuerdo con la decisión del presidente —y por temor a sus consecuencias legales— y el Congreso consiguió —esta vez, con extrema rapidez— los votos para *vacarlo* en medio de la aceleración de la crisis. Pocos se animaron a rechazar la vacancia.

En dos horas, Castillo pasaba de la disolución del Congreso a ser detenido por sus propios escoltas, cuando intentaba dirigirse a la embajada de México. La rapidez de la detención dejó ver, además, una articulación político-burocrática entre los militares, congresistas y poder judicial para contragolpear al presidente en el límite de la legalidad. En los grandes medios, analistas y periodistas no escondían su excitación por el vuelco en la situación y las críticas al gobierno combinaban argumentos sobre el deterioro institucional y la incapacidad de Castillo al frente de la presidencia, con la emoción de sentir que habían expulsado a un intruso que, debido a la crisis de representación de la política peruana y la implosión de su sistema de partidos, había recalado en el Palacio presidencial. Esta arrogancia de clase explica, en parte, la ola de protestas que siguió a la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte por sucesión constitucional.

Del campo a la ciudad, de “rondero” a presidente

Oriundo de la provincia de Chota, en la región de Cajamarca, Pedro Castillo tuvo un momento de proyección nacional en 2017, cuando lideró una huelga de maestros que, con un fuerte impulso desde las bases, desconoció los acuerdos entre el sindicato, dirigido por el partido Patria Roja, y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). El sector combativo contaba con el apoyo del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (el sindicato docente) vinculado al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADef), un grupo legal ligado a los restos del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Por eso, los maestros y el propio Castillo fueron en ese momento “terruqueados”, como llaman en Perú al hecho de acusar a los adversarios de terroristas como arma política. Los medios se preguntaban entonces, ¿quién es Pedro Castillo, el líder de la huelga?

Pero en 2021 esa huelga estaba lejos, y pocos recordaban ya al maestro de Chota. Castillo, que había pertenecido al partido centrista Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo, fue parte de los intentos de crear un partido magisterial, pero la pandemia y la falta de recursos complicó esos planes. Finalmente, terminó postulando por el partido Perú Libre, comandado por Vladimir Cerrón. Este neurocirujano formado en Cuba y exgobernador regional de Junín no podía postular por razones judiciales, y entonces habilitó la candidatura de Castillo sin pensar ni en sueños que podría ganar la presidencia. Castillo se afilió a Perú Libre pocos días antes del vencimiento del plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones de abril de 2021.

El sindicalista fue entonces a Lima a inscribirse. Su esposa Lilia Paredes, integrante de la Iglesia Cristiana del Nazareno, cuenta en un documental que los vecinos iban a preguntarle a su casa por qué Pedro no aparecía en los medios si era candidato a la presidencia [2]. En efecto, Castillo estuvo durante la primera etapa de la campaña fuera de los radares de los grandes medios y analistas -hasta febrero de 2021 medía entre 1% y 3% en las encuestas de IPSOS/El Comercio-. En marzo saltó a un todavía modesto 6%. En una campaña donde los postulantes subían y bajaban, y nadie terminaba de despegar, pasó así al *top five*. Otra vez, muchos se volvieron a hacer la pregunta ¿quién es Pedro Castillo? Y varios recordaron la huelga de 2017, su discurso “populista” y “radical” y lo volvieron a acusar de vínculos con Sendero Luminoso.

Perú Libre, el partido que lo postulaba, se define como “marxista-leninista-mariateguista”, pero al mismo tiempo se presenta como una “izquierda provinciana”, lo que, en una nación como Perú, dividida entre el país profundo y las élites limeñas, adquiere un sentido particular.

“Cuando sales a pedir derechos dicen que eres terrorista”. “Terrorista es el hambre y la miseria, el abandono, la desigualdad y la injusticia”. Con un sombrero chotano que nunca abandonaba, Castillo le habló a ese Perú que se siente históricamente excluido. No se presentó como indígena sino como campesino y “rondero”, en referencia a las rondas campesinas creadas en Cajamarca —su región— en los años setenta para enfrentar el abigeato y que se replicaron luego en el país en los años ochenta para hacer frente a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionaban muchas veces como instancia de autoridad en el

2 Disponible en: www.youtube.com/watch?v=tLp9zCSNGJw

campo (Starn, 1991). Su estrategia de campaña fue hacerse fuerte primero en las pequeñas localidades para, desde esos territorios en los que podía jugar de local, lanzarse a las grandes ciudades y, finalmente, intentar conquistar Lima. “Del campo a la ciudad”, como soñaban los antiguos maoístas peruanos, pero esta vez, el poder debía provenir de los votos y no de “la boca del fusil”. De hecho, Castillo no llevaba un fusil sino un lápiz gigante a cada mitin. “La máxima arma que podemos utilizar es el teléfono, es una herramienta. La tecnología ayuda a llevar el mensaje, cuando este es transparente, sencillo”, dijo entonces Richard Rojas, una de las pocas personas que acompañaba a Castillo por las regiones, donde el candidato daba entrevistas a medios locales y pronunciaba discursos transmitidos por Facebook. La camioneta que usaban era del propio Rojas. Aunque Castillo proviene del norte, su mayor convocatoria era originalmente en el sur, zona atravesada por una gran densidad organizativa y una fuerte tradición indigenista y antilimeña.

Finalmente, Castillo le ganó a Keiko Fujimori por 50,13% a 49,87%. Ambos pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos. Para tratar de llegar a la mitad más uno, dependieron del temor cruzado. La mitad del país votó contra el “comunismo” —incluido el escritor Mario Vargas Llosa— y la otra contra la vuelta de un Fujimori al poder.

Política y economía, ¿asuntos separados?

En las elecciones de abril de 2021 había una gran variedad ideológica para elegir, desde las izquierdas “provincianas” y “urbanas” hasta la extrema derecha, pasando por el nacionalismo y el neoliberalismo. Keiko Fujimori, Hernando de Soto,

Verónica Mendoza, Rafael López Aliaga y el propio Castillo buscaban mantenerse a la cabeza de las encuestas, pero las preferencias ciudadanas eran marcadamente volátiles. En un país que fue duramente golpeado por la pandemia, y que ha visto implosionar su sistema partidario, los partidos se parecen a emprendimientos personales y ser “antipolítico” es una buena carta de presentación electoral.

El autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 fue sin duda un punto de inflexión. En ese entonces, una gran parte de la población peruana estaba dispuesta a tolerar el autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos a cambio de la derrota del terrorismo, que tenía a Sendero Luminoso como una de sus expresiones más emblemáticas. Liderado por Abimael Guzmán, autodenominado “presidente Gonzalo”, este grupo maoísta no ahorró violencia para tratar de hacerse con el poder mediante la guerra popular prolongada. Fujimori, que había derrotado a Vargas Llosa por 62% contra 37,6% en las presidenciales de 1990, se aprovechó de ello para gobernar sin la molestia de las instituciones democráticas.

La economía pareció desconectarse de la política. “La inesperada victoria de Alberto Fujimori frente a Vargas Llosa, favorito en todas las encuestas, no supuso, sin embargo, la derrota de la coalición social que había respaldado al escritor”, escribió Carlos Adrianzén. Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las élites empresariales y los organismos internacionales sostuvieron a Fujimori, que fue reelegido en 1995 con más de 64 % de los votos (Adrianzén, 2014). Dos años antes, había logrado la aprobación de un nuevo texto constitucional. Finalmente, el “Chino” terminó renunciando en el año 2000 mediante un fax enviado desde Tokio tras el escándalo de los denominados “vladivideos” que

reveló un grado de corrupción generalizada en el gobierno (RPP, 2018). En 2005 fue detenido en Chile y extraditado a Perú dos años más tarde, donde cumple una condena de 25 años de prisión.

Pese a triunfos de candidatos como Ollanta a Humala en 2011, con críticas al neoliberalismo, quedó fuera del ciclo progresista que tiñó a gran parte de la región. Y Keiko Fujimori quedó una y otra vez cerca de la presidencia (48,56% en 2011, 49,88% en 2016, 49,87% en 2021). El fujimorismo sobrevivió a su fundador, pero no logró sacarlo de la cárcel.

Para el politólogo Alberto Vergara “la precariedad de la política peruana ha sido funcional al éxito del modelo económico”. Al momento de escribir sobre el primer año de la presidencia de Ollanta Humala (2011-2016), Vergara se preguntaba: “¿No habría, más bien, que escribir sobre este pétreo sistema político, económico, cultural que se apresta a cumplir veinte años en el país, y al que le da exactamente igual si los gobernantes son democráticos o autoritarios, exaltados o tímidos, expertos o novatos, con partido o sin partido?” (Vergara, 2012).

Vergara atribuía a estabilidad del modelo peruano al macroarreglo institucional surgido con la Constitución de 1993 “que cimenta la forma en que se articulan Estado, sociedad y mercado”. Ese macroarreglo se mantuvo, tras la caída de Fujimori, bajo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El país experimentó entre 2003 y 2013 tasas de crecimiento promedio de 6% del PIB, con una fuerte reducción de la pobreza. El PIB per cápita de 2012 estaba un 66 % por encima del de 2002 y era más del doble de su nivel de 1992. Como muestra de continuidad en la tecnocracia, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, ocupa el cargo desde 2006

hasta el día de hoy. Pero ya entonces (mediados de 2012), Vergara percibía los límites de ese consenso y algunas de sus reflexiones adquirieron una especial actualidad en los siguientes años, cuando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski abrió un periodo de gran inestabilidad política. El politólogo peruano identificaba cuatro elementos novedosos que daban cuenta del comienzo del agotamiento del macroarreglo del 93:

En primer lugar, la sociedad ya no es una petrificada masa posconflicto. Lleva una década reclamando, boicoteando y perfeccionando el oficio de bajarle la llanta a las intenciones proempresariales del Gobierno. En segundo lugar, las autoridades subnacionales cuentan con muchos recursos, lo cual energiza la protesta si ellas se alinean con sus movimientos sociales. En tercer lugar, las autoridades nacionales [...] poseen cada vez menos capacidades políticas. [...] El sostenido enriquecimiento de la sociedad peruana les ha administrado esteroides a todos los actores *menos* a las estructuras políticas e institucionales que deberían mediar entre los codiciosos actores en disputa. Si todas estas tendencias siguen acentuándose, aquello que era funcional al éxito del modelo económico (la precariedad política) puede revertirse y ser, más bien, el origen del fin del exitoso ciclo (Vergara, 2012).

En efecto, los siguientes años verán la caída de varios presidentes y el enjuiciamiento y prisión de casi todos quienes pasaron por la Casa de Pizarro, además de numerosos gobernadores y alcaldes. El caso más dramático fue el de Alan García —quien fue uno de los políticos más carismáticos y populares del país— que para evitar la detención optó por dispararse un tiro en la cabeza. Ese momento, Adrianzén se preguntó si la muerte de Alan García era también la de la élite política peruana.

Un año después, el mismo autor escribía que la crisis del fuji-morismo, la enorme fragmentación y dispersión del voto, y la sorpresa del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), con tonalidades milenaristas, se sumaban a una reconfiguración del eje izquierda/derecha en Perú. Refiriéndose a las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, Adrianzén escribió que *“mientras que en 2016 las tres primeras fuerzas políticas acumulaban 84% de las bancas; hoy los tres primeros alcanzan solo 47%. Mientras que hace cuatro años la primera fuerza política logró 56% de los escaños, el 26 de enero de 2020 el partido más votado ha obtenido tan solo 19% de los asientos en el Parlamento”* (Adrianzén, 2020).

La votación del Frepap —vinculado a una facción del evangelismo y cuyo eslogan era “El agro al poder”— expresó el hartazgo con la clase política y, como lo haría Castillo más tarde, la reacción antilimeña del Perú profundo. Pero lo significativo es que en 2020 ni Castillo ni Perú Libre estaban en el terreno de juego y que en 2021 los que sí capturaban el inconformismo, como el Frepap, estaba de nuevo en la marginalidad electoral. Si Perú libre pasó de cero a 37 parlamentarios en ese lapso, el Frepap pasó de 16 a cero. Como síntoma de la crisis, el otrora mítico y centenario Partido Aprista Peruano perdió su inscripción en 2021.

La legislación peruana, permite “vacar” al presidente con tres quintos del Congreso unicameral y establece la obligación del poder ejecutivo de someter a los presidentes del Consejo de Ministros al voto de confianza de los congresistas. Si el Congreso rechaza la confianza a dos candidaturas elevadas por el jefe de Estado, este puede disolverlo y convocar a elecciones de manera inediata para conformar otro. Esa fue la razón de las mencionadas elecciones especiales de 2020 tras la disolución

del Congreso por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre de 2019. Todo ello ha dado lugar a fuertes choques de poderes y hoy está sobre la mesa una reforma política que permita reordenar una institucionalidad que, en un contexto de fragmentación y el uso de la vacancia como forma de chantaje político, es una de las fuentes (no la única) de inestabilidad política en el país. En 2020, tras la destitución de Vizcarra por el nuevo Congreso, las protestas populares contra el “golpismo” —y contra la desigualdad social— comenzarían a jugar su propio rol en la crisis peruana, que aparecería desde entonces como una nueva normalidad.

El cambio que no fue

A diferencia de Evo Morales, que antes de llegar a la presidencia en 2005 había sido jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), había negociado como dirigente de los campesinos cocaleros con diferentes gobiernos y era regularmente invitado al exterior, Castillo dio un salto directo de Cajamarca a Lima con su experiencia como sindicalista de provincias como único capital. También a diferencia de Bolivia, donde la sede de Gobierno, La Paz, es una ciudad plebeya y tradicionalmente combativa, que blindó el poder de Morales, Lima fue desde el comienzo un territorio hostil para el nuevo presidente. Mientras que el triunfo del MAS fue el resultado de un largo declive de las élites señoriales del occidente andino, desafiadas por nuevas élites económicas de origen indígena, Castillo llegó al gobierno casi de casualidad, por haber quedado bien ubicado en las encuestas en la última semana previa a las elecciones. Finalmente, mientras Morales contaba con la enorme fuerza del MAS, un partido de sindicatos con

una fortísima capilaridad territorial, Castillo compitió como invitado de un partido cuya fuerza era muy limitada.

Mientras la derecha lo seguía considerando una suerte de comunista a la espera del zarpazo, la izquierda se decepcionaba de la falta de políticas transformadoras. “El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de ministros sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos”, sintetizó la excongresista de izquierdas Marisa Glave (Stefanoni, 2022). La prensa los denominó, no sin desprecio, “los chotanos” o “los chiclayanos” por sus zonas de origen. Y se trató en algunos casos de financiadores de la campaña de Castillo que terminaron repartiendo áreas del Estado.

De esta forma, las denuncias de corrupción, que comenzaron a llegar cada vez más cerca del presidente —la primera dama es investigada por la Fiscalía— se solaparon con la reacción de las élites ante el “asalto cholo” del poder.

Castillo no solo se distanció de la izquierda “caviar” sino también de Perú Libre [3]. De modo que su base se fue reduciendo y nunca pudo conseguir una tregua de la oposición en el Congreso. Este ya nació fragmentado y se siguió fragmentando luego, por ejemplo, con varias divisiones de la bancada de Perú Libre. Como parte del acoso, el Congreso impidió al mandatario realizar varias salidas al exterior, como el viaje a Colombia

3 Este partido mantiene una guerra abierta con-tra “los caviaristas” y posiciones bolivarianas en el plano de la política regional: “No tenemos una alianza con la ultraderecha, lo que hay es una coincidencia espontánea anticaviar. Coincidimos porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia. No puedo hacer una alianza con los ‘oenegeros’ aliados de USAID. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal”, declaró Cerrón.

para la posesión de Gustavo Petro o a la cumbre de la Alianza del Pacífico. De nada sirvió que, en febrero pasado, Castillo abandonara el sombrero chotano y se mostrara con traje para descampesinizar su figura.

El racismo atraviesa el discurso político peruano. Ya durante la campaña, el periodista Beto Ortiz echó a la candidata al Congreso Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la “corrección política” no llegó a sectores de las élites limeñas. Luego la llamó “verdulera” y más tarde se disfrazó de indio — con su histrionismo habitual— para darle la bienvenida de manera socarrona al “nuevo Perú” de Pedro Castillo. Hace pocos días, un congresista fujimorista se refirió de manera despectiva a una autoridad de Puno, localidad ubicada en el sur del país, por llamar “hermanos” a los congresistas, un término habitual en el mundo aymara. El congresista Ernesto Bustamante interrumpió a la autoridad regional increpándolo: “¡Acá en Lima se dice señores!” Y luego continuó: “Una persona que dice que no está incluido en la Constitución del Perú porque no menciona a pueblos originarios, ¿qué cosa quiere, que mencione a los que viven en su cuadra?”.

Durante las protestas que sucedieron a la destitución de Castillo un presentador de televisión preguntó a un jefe policial: ¿Por qué no les han metido un tiro en la cabeza? |4|. La pregunta no era retórica: al momento de escribir este artículo, la cantidad de muertos ascendía a 26 (Turkewitz, 2022).

La decisión presidencial de cerrar el Congreso sorprendió a la mayoría de los ministros y recibió el rechazo de la izquierda democrática. Esta consideró la decisión como un golpe

4 Ver tuit: <https://twitter.com/PiensaPrensa/status/1601225585711550465>.

frustrado que recordaba el autogolpe de 1992, aunque más que convertirse en dictador Castillo diera un absurdo manotazo de ahogado. Desde una visión más pragmática, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón consideró que el presidente se apresuró. Hoy nadie logra explicar qué llevó a Castillo a tomar esa decisión ni quienes lo convencieron de ella.

En ese momento, había una enorme presión para desmarcarse del estigma de “golgismo”; por eso el alejamiento de casi todos los colaboradores del presidente (incluso de su abogado). Pero con el paso de las horas, las imágenes se fueron modificando. Sobre todo, se fue instalando la sensación de que el Congreso, más impopular que Castillo (casi 90 % de imagen negativa) se había salido finalmente con la suya. Y la detención del expresidente, y el linchamiento mediático, lo fueron victimizando. En ese marco, estallaron varias protestas. La consigna más movilizadora y unificadora es la de cierre del Congreso y nuevas elecciones, a lo que se suma en varios sectores la consigna de Asamblea Constituyente para abordar cuestiones estructurales.

Los prefectos nombrados por el gobierno de Castillo, muchos de los cuales pertenecen a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) y a Perú Libre, son parte de las movilizaciones. En pocas horas, lo que parecía una sucesión constitucional legítima, se fue transformando para muchos en una transición ilegítima, en la que Dina Boluarte habría sido finalmente funcional a la “coalición vacadora” y de las élites prepotentes, con la vicepresidenta —una funcionaria pública con escasa trayectoria política— como instrumento del “Congreso corrupto”. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 71 % de los consultados mostró su desacuerdo con que Boluarte haya asumido la presidencia. Y las movilizaciones se extendieron por diversas zonas el país,

así como la represión policial y los allanamientos contra sedes de diversas organizaciones sociales.

Las protestas tienen como estructura una mezcla de los sindicatos, economías informales y sectores campesinos, que se fue articulando de diversas formas con autoridades locales.

Un ejemplo de la radicalidad que tomaron las protestas fue el abucheo a Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, y representante de una versión radical del nacionalismo peruano de base andina, acusado por la multitud de “reconocer” a Boluarte como presidenta. Antauro propone fusilar a los expresidentes corruptos, incluido su hermano a quien además considera un “traidor” (Infobae, 2002) y se propone ser la expresión del inconformismo social desde un etnonacionalismo “antiextranjero” denominado “etnocacerismo” (Stefanoni, 2005). Otros, como el alcalde electo de Lima, un empresario de extrema derecha que se dice enamorado de la Virgen María, y comentó en varias entrevistas que se autoflagela para unirse a la pasión de Cristo [5], buscan que la crisis decante por la derecha.

En este contexto, Boluarte trata de hacer equilibrios para seguir en el poder. Por lo pronto le pasó “la pelota” del adelanto electoral al Congreso y ha prometido bonos a los agricultores, afectados por una sequía histórica, y aumento a los funcionarios públicos. Si en su investidura juró hasta 2026, luego redujo su horizonte a 2024, mientras continúa la discusión sobre la fecha de las nuevas elecciones. La nueva presidenta ha destituido al presidente del Consejo de Ministros una semana después de haberlo nombrado, mientras crecen las denuncias sobre la

5 Pueden verse sus declaraciones en:

www.youtube.com/watch?v=FuL6kPeNGGQ

violenta represión de las protestas. Dos ministros renunciaron por ese motivo. Aunque pidió una tregua al momento de asu-
mir, es poco probable que la consiga. El congresista de Perú
Democrático —un desprendimiento de Perú Libre— Gui-
lermo Bermejo amenazó: “Si no encuentra asilo político [Di-
na Boluarte] va a terminar presa”. Por ahora, sigue la crisis y
los riesgos de que haya más muertes también.

Conclusiones

- Pedro Castillo llegó al gobierno en una elección caracterizada por la fragmentación en la primera vuelta y la polarización en la segunda, y ganó por una mínima diferencia contra Keiko Fujimori. La mitad del país votó contra el fujimorismo y la otra mitad contra el “comunismo”.
- Tras postular por el partido Perú Libre, el gobierno de Castillo perdió primero el apoyo de la izquierda urbana y luego se distanció de la izquierda “provinciana”, mientras se recostaba cada vez más en un círculo opaco que mezclaba política y negocios.
- Desde el comienzo, la oposición de derecha intentó destituirlo desde el Congreso por “incapacidad moral permanente”, mientras Castillo mostraba un rumbo errático y cambiaba permanentemente de ministros.
- La decisión de Castillo de cerrar el Congreso cambió el escenario político y una amplia mayoría de los parlamentarios votó en favor de la vacancia, tras lo cual fue detenido mientras buscaba asilo en la embajada mexicana.

- Dina Boluarte lo sucedió en un clima de protestas sociales que promueven la disolución del Congreso y el adelanto electoral para 2023. La represión ya ha causado más de 25 muertes.

Referencias bibliográficas

ADRIANZÉN, C. (2014): “Una obra para varios elencos. Apuntes sobre la estabilidad del neoliberalismo en el Perú”, *Nueva Sociedad* n° 254, noviembre-diciembre. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/una-obra-para-varios-elencos-apuntes-sobre-la-estabilidad-del-neoliberalismo-en-el-peru/>.

— (2020): “¿Quién ganó y quién perdió en las últimas elecciones peruanas?”, *Nueva Sociedad*, ed. digital, febrero. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/elecciones-Peru-Vizcarra-Fujimori/>.

INFOBAE (2022): “Antauro Humala volvió a desearle la muerte a su hermano Ollanta después de llamarlo ‘traidor’”, *Infobae*, 25 de septiembre.

Disponible en:

<https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/25/antauro-humala-vuelve-a-desearle-la-muerte-a-su-hermano-ollanta-tras-lamarlo-traidor/>.

RPP (2018): “Los ‘vladivideos’ que marcaron el final del régimen de Alberto Fujimori”, *RPP*, 21 de marzo. Disponible en: <https://rpp.pe/politica/gobierno/los-vladivideos-que-marcaron-noticia-1111709>.

STEFANONI, P. (2005): “¿Qué son y que quieren los entonaceristas?, entre-vista con Cecilia Méndez”, *El Viejo Topo*, n° 205-206, abril. Disponible en: <https://www.history.ucsb.edu/wp-content/uploads/39-Que-son-y-que-quieren-los-etnocaceristas.pdf>.

— (2022): “De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú”, entrevista a Marisa Glave, *Nueva Sociedad*, ed. digital, diciembre. Disponible en <https://nuso.org/articulo/pedrocastillo-peru-boluarte/>.

STARN, O. (1991): *Reflexiones sobre ron-das campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales*, Li-ma, IEP.

TURKEWITZ, J. (2022): “Una pausa en las protestas de Perú para honrar a los muertos”, *The New York Times*, 19 de diciembre.

VERGARA, A. (2012): “Alternancia sin alternativa: ¿Un año de Humala o veinte años de un sistema?”, *Argumentos*, julio. Disponible en: <https://argumentos-histori-co.iep.org.pe/articulos/alternancia-sin-alternativa-un-ano-de-humala-o-veinte-anos-de-un-sistema/>.

PERÚ: ARREMETIDA AUTORITARIA Y RESPUESTA POPULAR |★|

por Anahí Durand |★★|

Se cumple un mes desde que Dina Boluarte, los partidos de derecha que perdieron las elecciones, poderes económicos y Fuerzas Armadas, instalaron a sangre y fuego un régimen cívico militar avalado por la Fiscalía y la Embajada de los Estados Unidos.

Los peruanos vivimos una arremetida autoritaria que empezó a cocinarse antes que Pedro Castillo asumiera la presidencia y busca cerrar con violencia la crisis de régimen expresada con mayor nitidez los últimos seis años. Los grupos de poder han decidido que es tiempo de terminar con las aspiraciones levantisca de un pueblo que pide cambios y se atrevió a elegir un presidente como ellos para realizarlos.

El plan restaurador está en marcha; cuentan con una presidenta títere que da cobertura legal y un Congreso dispuesto a promulgar leyes abominables para copar el Estado. Tienen unas fuerzas armadas dispuestas a masacrar civiles, una Fiscalía que

★ Fuente: [Cronicón](#)

★★ Anahí Durand Guevara (Lima, 1 de abril de 1978) es una socióloga y política peruana. Fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú desde el 29 de julio de 2021 hasta el 2 de febrero de 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo.¹

investiga por terrorismo a quien incomode y grandes medios de comunicación manipulando la realidad.

Pero un elemento escapó a sus cálculos: el pueblo excluido al que miraban con desprecio y creyeron acataría sumisamente sus designios, se moviliza desde el primer día con una plataforma clara: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, una nueva Constitución y libertad a Pedro Castillo. La respuesta del poder ha sido brutal y suma hasta hoy 48 peruanos asesinados, cientos de heridos y detenidos. Pero la protesta no decae y, especialmente en el sur del país, el pueblo no ha dejado de movilizarse. La disputa por definir la salida a la crisis sigue abierta y es importante analizar dos vectores decisivos en la correlación de fuerzas. De un lado quienes componen la coalición que gobierna y busca cerrar la crisis de régimen autoritariamente, de otro lado, cómo se configura la movilización popular que podría concretar una salida democrática sostenida en una nueva constitución. El desenlace es incierto...por ahora.

La coalición que gobierna: restauración autoritaria y mafiosa

Desde el 2001 con la transición inconclusa y con mayor fuerza desde el 2016 cuando el Fujimorismo logró hiper mayoría parlamentaria, el país vive un grave deterioro democrático. El Congreso concentra mayor poder abusando de figuras como la “*vacancia por incapacidad moral*” para destituir presidentes y cerrando canales de participación ciudadana como el referéndum. La Fiscalía y el Poder Judicial han adquirido protagonismo político orientando sus investigaciones a los adversarios de la derecha mientras las Fuerzas Armadas y Policiales tienen

cada vez más acción y opinión deliberante. En esta línea autoritaria se inscribe la coalición que trabajó activamente por la destitución de Castillo y hoy sostiene al régimen Boluarte.

Asumiendo que Dina Boluarte es apenas la cara legal del régimen, el primer anillo del poder lo tiene el Congreso y más concretamente los partidos de derecha que perdieron las elecciones. El fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País son el bloque reaccionario que ha llevado la batuta en toda la crisis diluyendo al centro político al punto de someter a Acción Popular y Alianza para el Progreso. Fueron los que inventaron el fraude electoral y los que presentaron las tres mociones de vacancia contra Castillo. Hoy tienen su cuota de ministerios en el Ejecutivo y respaldan la cruenta represión tal como se demostró cuando entregaron el voto de investidura al gabinete liderado por Alberto Otárola, pese a los 18 asesinados en la jornada sangrienta de Juliaca el día anterior.

Desde el Parlamento, estos partidos impulsan una peligrosa “*reforma política*” manipulando la legalidad y violentando la Constitución con el fin de perpetuarse en el poder y asegurarse no perder otra vez la presidencia. Para ello, pretenden cambiar a los jefes de los organismos electorales Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Jurado Nacional de Elecciones. El principio de separación de poderes no existe y lo demuestra el proyecto de ley según el cual cuando Dina Boluarte sale al extranjero el Presidente del Congreso quedaría como mandatario encargado. No se esmeran en guardar las formas y no es seguro todavía que confirmen en segunda votación el adelanto de elecciones para abril del 2024

Otro actor fundamental en esta coalición son los grupos de poder económico que asoman luego del susto. Si bien durante el

gobierno de Castillo no tuvieron grandes pérdidas, la relación fue tensa, signada por la profunda desconfianza y un explícito clasismo y racismo. Hoy la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, el gremio de agroexportadores, entre otros, retoman el canal con el ejecutivo y despachan directamente con Boluarte. Además, durante el 2024 se renovarán importantes concesiones mineras y petroleras, por lo que han aceitado los *lobbies* en el Congreso y no les interesa el adelanto de elecciones para el 2023. La oligarquía limeña tradicional junto a los aspirantes emergentes como [César Acuña](#), creen tener nuevamente el control del Estado para sus negocios y no están dispuestos a perderlo fácilmente.

Las Fuerzas Armadas y Policiales son otro poder importante en esta coyuntura. Luego del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos que implicaron a mandos policiales y militares, se pensó que los órganos coercitivos no tendrían protagonismo político. Sin embargo, hoy vemos a generales del Ejército y la Policía con una vocería política inusitada, justificando la cruenta represión bajo el argumento de que las protestas participan delincuentes y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Finalmente, se cuenta a la Fiscalía y al Poder Judicial muy activos para la destitución de Castillo y cercanos a Boluarte al punto que el primer gabinete estuvo presidido por Pedro Angulo, cercano a la fiscal Patricia Benavides. Luego de una semana, tras los primeros 20 asesinados en las protestas, Angulo fue destituido, pero rápidamente asumió como jefe de asesores del Poder Judicial. La Fiscalía ha sido rápida para judicializar y criminalizar la protesta abriendo fiscalías especializadas en delitos de terrorismo con el claro fin de encausar a líderes y autoridades opositoras.

En suma, gobierna el país un entramado de poderes conservadores articulados desde sus propios intereses para lograr un fin común; retomar el poder que sintieron perder por dieciséis meses y asegurarse de no soltarlo.

Ofensiva de restauración conservadora

El régimen de Boluarte no es un simple gobierno de transición, es una ofensiva restauradora orientada a cerrar la crisis de forma autoritaria y mafiosa, disparando contra la población y amañando poderes electorales para perpetuarse y mantener sus privilegios. No es seguro todavía que se realicen elecciones el 2024 y si las hay tampoco es seguro que existan garantías de participación para las fuerzas populares, de izquierda o progresistas. La arremetida dictatorial está en marcha y se impone a plomazos. Así funciona la derecha en el Perú, muestra su lado sangriento cuando la democracia no le favorece. Así actuaron en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori imponiendo un modelo y una Constitución que hoy quieren salvar a toda costa, aunque signifique mayor violencia y división entre peruanos.

El autogolpe de 1992 significó en Perú la imposición del neoliberalismo como un régimen económico que prioriza el libre mercado, como un régimen político que organiza una gobernabilidad tecnocrática supuestamente despolitizada y también como un modelo de sociedad donde se impone el individualismo por sobre los vínculos comunitarios. En tal sentido, cada cual hace su propio sendero y es responsabilidad personal triunfar en un mundo hostil, encubriendo la precariedad del trabajador informal con el discurso de “*emprendedores*”. En un país impactado por el conflicto armado, la hiper inflación y el clientelismo fujimorista, este modelo de sociedad se expandió

especialmente en Lima y las grandes ciudades. El repliegue de las izquierdas y el ajuste estructural que deterioró la vida influyó en una creciente despolitización.

Durante la transición del 2001 fueron las Ongs y la Iglesia las que asumieron la vocería de la “*sociedad civil*” orientando una agenda reformista que, entre otras cosas, negó la demanda de cambio de Constitución.

Del 2001 en adelante, las protestas en Perú se activaron en torno a demandas vinculadas al modelo económico extractivo, gremiales o de infraestructura. Los sindicatos se movilizaron por derechos laborales, los productores cocaleros contra la erradicación de cultivos, los movimientos indígenas y campesinos contra la expansión de la industria minera o petrolera en sus territorios. Se trataban de protestas caracterizadas por la dispersión de agendas y desconexión territorial. Por ejemplo, las protestas contra la expansión minera en Tía María, Arequipa, no generaban una ola de movilización en otras zonas como Conga en Cajamarca y eran resueltas tras una negociación con el Ministerio correspondiente. Estas luchas tampoco se encontraban conectadas a una plataforma política antineoliberal pues, aunque cuestionaban ejes claves del modelo, no se enuncian en dicho sentido.

Estos conflictos sociales encontraban un cauce político en los procesos electorales. Sostenedamente estos sectores votaron a opciones de cambio que una vez en el gobierno traicionaron sus promesas. La pandemia reforzó estas expectativas y 2021 el Perú excluido, informal y precarizado de maestros, mototaxistas, cocaleros, mineros informales votó por uno de los suyos. Los abiertos ataques de la derecha al gobierno de Castillo, cargados de clasismo y racismo, contribuyeron a la

politización de estos sectores afirmando un nosotros colectivo antagónico a la clase política limeña y tradicional. También la acción del gobierno abonó a la mayor conciencia política de los sectores excluidos especialmente en el Perú rural. Los gabinetes descentralizados, los constantes viajes de Castillo a provincias y sus multitudinarios mítines, generaron un vínculo entre pueblo y presidente, desplegando además lógicas consuetudinarias y comunitarias propias del mundo andino, sean las rondas o las comunidades indígenas. La Asamblea decide y el presidente ejecuta.

Apenas destituido Pedro Castillo y juramentada Dina Boluarte, las protestas estallan con una magnitud inusitada abarcando prácticamente todo el país, aunque el epicentro es el sur andino. La masividad y cobertura territorial de las protestas sorprendió a la clase política y la academia lo mismo que su plataforma netamente política. Desde la sierra de Ayabaca en Piura hasta Juliaca en Puno, pasando por Pucalpa, Ayacucho y todo el sur, cientos de miles tomaron calles y plazas con una plataforma unificada: cierre del Congreso, nueva Constitución, libertad a Castillo y renuncia de Dina Boluarte. El grupo que inició las protestas fue este núcleo duro que votó y respaldó a Castillo, pero rápidamente se expandió y lo sobrepasó. La respuesta del Ejecutivo llevando a cabo una masacre no vista las últimas décadas con 49 asesinados, genera solidaridades y expanden el radio de la protesta.

A un mes de instalado el nuevo régimen, salvo la tregua navideña las protestas no se han detenido un solo día, al contrario, se anuncian paralizaciones y marchas a Lima.

Esta politización del Perú rural y excluido es algo inédito y está cambiando decisivamente la dinámica política nacional,

abriendo un momento de deliberación colectiva en torno a los principales problemas políticos. Hoy en las plazas de distritos y comunidades la gente se reúne en Asamblea, discute sobre las acciones a tomar en la protesta y también sobre temas de exclusión histórica. “*No es el 7 de diciembre, son 200 años*” se escucha repetir en Andahuaylas o Juliaca y se abordan salidas de fondo. Una nueva Constitución escrita por una Asamblea Constituyente con representantes legítimos del pueblo organizado es la salida que se abre paso desde los Andes y la Amazonía. Esta potencia que despliega el estallido irradia también las ciudades, llega por solidaridad, por paisanos asentados en Lima o el norte y puede ser finalmente lo que defina el escenario e incline la balanza a favor de un proceso constituyente.

El campo popular se moviliza, no retrocede ante la brutal represión, genera adhesiones y solidaridades, pero todo esto es aún insuficiente para dirimir una salida democrática y constituyente a la crisis. La falta de liderazgos legitimados de alcance nacional se mantiene, y la desconexión entre plataforma político social e instrumento político electoral también.

Boluarte ha dicho que no renunciara y el pueblo que no dejara la protesta. La disputa sigue abierta, por ahora. ■

[@AnahiDurandG](https://www.instagram.com/AnahiDurandG)

<https://lalineape.com/>